

DEPORTE E INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL: RÉGIMEN JURÍDICO EN EL ÁMBITO ESTATAL Y EN EL AUTONÓMICO VALENCIANO

Sports and inclusion of people with intellectual disabilities:
legal regime at the State level and in the Valencian region

ALEJANDRO VALIÑO ARCOS

Catedrático de la Universitat de València.
Presidente del Tribunal del Deporte de la Comunitat Valenciana

Revista Aranzadi de Derecho de Deporte y Entretenimiento 69
Octubre – Diciembre 2020
Págs. 21–46

Resumen: El autor analiza el régimen jurídico del deporte para personas con discapacidad como un medio para la inclusión social.

Palabras clave: Deporte – Personas con discapacidad – Inclusión social

Abstract: The author analyzes the legal regime of sport for people with disabilities as a means for social inclusion.

Keywords: Deporte – Personas con discapacidad – Inclusión social

Fecha de recepción: 18-9-2020

Fecha de aceptación: 3-10-2020

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN: LA IMPORTANCIA DEL DEPORTE PARA LOGRAR LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL. II. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN EL ÁMBITO ESTATAL. 1. *Constitución Española*. 2. *El deporte en La Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad*. 3. *El deporte en la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social*. 4. *La discapacidad en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte*. 5. *La Federación Española de Deportes para personas con discapacidad intelectual (FEDDI)*. III. "CORPUS" NORMATIVO DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN LA COMUNITAT VALENCIANA. 1. *Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana*. 2. *Carta de los Derechos Sociales de la Comunitat Valenciana*. 3. *Estatuto de las Personas con Discapacidad*. 4. *La discapacidad intelectual en la regulación del Deporte en la Comunitat Valenciana*. 5. *La federación deportiva de personas con discapacidad intelectual en la Comunitat Valenciana*. 5.1. La necesidad de adaptar su normativa interna a las exigencias del Decreto 2/2018. 5.2. Estatutos de FEDI-CV. 5.3. Programa Deportivo de FEDI-CV. IV. RETOS

DE FUTURO: CÓMO HACER PLENA LA EXPERIENCIA DEPORTIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL.

I. INTRODUCCIÓN: LA IMPORTANCIA DEL DEPORTE PARA LOGRAR LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

La tradicional disquisición sobre qué hacer en el plano educativo con las personas con discapacidad intelectual (si dispensarles una educación especial y diferenciada o integrarles, con las debidas adaptaciones, en el ámbito de la educación llamémosle ‘ordinaria’), se ha orientado decididamente en el último quinquenio por la segunda senda. A ello ha contribuido decisivamente la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, aprobada el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), ratificada por España el 3 de diciembre de 2007 y en vigor desde el 3 de mayo de 2008, que establece que “los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida (...)”.

Para “hacer efectivo este derecho, los Estados Partes asegurarán que: a) Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad, y que los niños y las niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad; b) Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en la comunidad en que vivan; c) Se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales; d) Se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad, en el marco del sistema general de educación, para facilitar su formación efectiva; e) Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión”¹.

De esta amplia y ambiciosa formulación destaca principalmente el reconocimiento del derecho a la educación “a todos los niveles” y “a lo largo de toda la vida”, que habrá de acometerse “sin discriminación” y sobre la base de la “igualdad de oportunidades”. Para su efectividad, se han de considerar “las necesidades individuales” de cada cual, lo que impone acometer “ajustes razonables” y prestar “el apoyo necesario” en “entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión”.

1. Artículo 24.1 y 2. Sobre las distintas reformas educativas en el sistema español, véase la contribución de M. A. VERDUGO ALONSO, A. M. AMOR GONZÁLEZ, M. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, P. NAVAS MACHO e I. CALVO ÁLVAREZ, “La regulación de la inclusión educativa del alumnado con discapacidad intelectual: una reforma pendiente”, en *Siglo Cero*, núm. 266 (2018), pp. 27-58.

Para la mejor y más eficaz protección e integración de las personas con discapacidad es habitual la constitución de potentes plataformas², pero, al margen de ellas, no podemos desconocer las muchas iniciativas particulares que persiguen incansablemente ese propósito de integración en todos los aspectos que conforman su vida social³.

Los beneficios que deja la práctica del deporte en todas sus vertientes a quienes lo practican son incontestables. Además de las meramente físicas y emocionales, interesa destacar de su práctica libre y competitiva su carácter instrumental para forjar sólidos valores delimitadores de la personalidad del individuo. El deporte, como cualquier aspecto de la vida social, no se concibe sin el esfuerzo, esto es, sin poner, después de un proceso de formación (aprendizaje y entrenamiento), todas nuestras energías, talento y destreza en la consecución de una meta, en la obtención de un resultado, que identificamos con el éxito o con el fracaso, según si coincide o no con los anhelos que en nuestro ser interno hemos podido concebir.

2. En la Comunitat Valenciana destaca la plataforma “Plena inclusión Comunidad Valenciana” (plenainclusioncv.org), que es “un movimiento de asociaciones de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias”, revestida de la forma jurídica de ONG sin ánimo de lucro y reconocida como Asociación de Utilidad Pública por parte del Ministerio del Interior del Gobierno de España, que agrupa (agosto de 2020) a 59 asociaciones, 6663 familias, 7109 personas con discapacidad intelectual, 212 centros y 1808 profesionales. Al mismo tiempo, se integra en el “Movimiento Asociativo Plena Inclusión España”, del que forman parte un total de 19 entidades de ámbito autonómico. Esta plataforma proclama que “la inclusión de las personas con discapacidad intelectual convierte a una sociedad corriente en una sociedad abierta, positiva y equitativa, una sociedad extraordinaria”; que “la discapacidad intelectual no es una característica sola de la persona, sino que, a las personas, si se le dan los apoyos que necesitan, pueden hacer cosas”; y que “la familia es la que hace que se integren en la sociedad, que se les tenga en cuenta”.
3. En lo concerniente al deporte en la Comunitat Valenciana, se ha de destacar entre otras la apuesta por la creación en 2012, con el lema “Dibujamos sonrisas”, de una Escuela de Fútbol para Personas con Discapacidad Intelectual por parte del Levante U.D, del que arranca el equipo Levante U.D. EDI (levanteuud.com/es/info/levante-ud-edi). También se ha de destacar la apuesta de la Fundación Soundtennis (soundtennis.net) por el fomento del tenis entre personas con discapacidad intelectual a través del Proyecto “Tenis Integra”, en el que, con una novedosa metodología, se hace patente la estrecha cooperación de entrenadores de tenis y profesionales de la educación especial. Por último, no puede olvidarse la ilusionante iniciativa de la Asociación Deportiva “Crecer en positivo” (crecerenpositivo.org), que vio la luz “para atender una serie de necesidades y deseos insatisfechos en lo que respecta al Deporte y Ocio de las personas con discapacidad Intelectual y/o con necesidades especiales de apoyo”. De su labor se ha de destacar, por una parte, el llamado “Proyecto Unitts”, ordenado a “organizar actividades deportivas y de ocio de tal manera que se fomente el relacionamiento social entre los usuarios y el desarrollo de aptitudes que le permitan manejarse con soltura ante diferentes situaciones del mundo real”; y, por otra, el “Proyecto Club Deportivo”, enfocado a “los aspectos de Competición, donde nuestros usuarios puedan crecer como deportistas y disfrutar del placer de competir en diferentes disciplinas y Torneos tanto a nivel Autonómico como Nacional. Apuntamos al desarrollo completo del individuo, potenciando su capacidad de competir como deportista, pero sin olvidar inculcar los valores que se puede adquirir a través de la práctica del deporte de competición”. Uno de los logros en los que se manifiesta este programa es el proyecto “Padel Unitts K7” (<http://crecerenpositivo.org/padel-unitts-k7/>).

El bagaje con el que cada cual cuenta de partida es el talento o capacidades (*abilities*), definidas como “rasgos estables y duraderos que, en su gran mayoría, están determinados de manera genética. Mejoran la habilidad en el rendimiento de un individuo y en general no se pueden mejorar por medio de la práctica”. La destreza o habilidades (*skills*) son el resultado de aplicar el aprendizaje y el entrenamiento, aderezados con el esfuerzo, a esas innatas capacidades con las que cada cual cuenta. Estas habilidades representan, por tanto, “cualquier actividad que involucre el cuerpo, o ciertas partes de este, para lograr una meta específica predeterminada. En otras palabras, las habilidades motoras pueden representar tareas físicas individuales”⁴.

Si consideramos a las personas con discapacidad intelectual, sus capacidades, con independencia de su mayor o menor incidencia sobre su comportamiento motor, aparecen afectadas por condicionantes genéticos, lo que influye de manera notable en la adquisición de habilidades o destrezas que conforman la específica y singular técnica de una determinada modalidad deportiva. Ello trae consigo que su rendimiento, concebido en términos absolutos, sea menor. Sin embargo, por los muchos beneficios físicos y emocionales que el deporte reporta para las personas con discapacidad intelectual, por el hecho de constituir el deporte para ellos toda una experiencia vital en la que están presentes un buen número de valores fundamentales para la convivencia social, se ha de procurar el acceso, siquiera sea adaptado a las particulares circunstancias concurrentes en estas personas, tanto a su práctica libre como de carácter competitivo. Y esta idea aparece reflejada sin dificultad en nuestro ordenamiento jurídico, no sólo en la normativa sectorial reguladora del fenómeno de la discapacidad, sino también en la propiamente deportiva. De su análisis me ocupo seguidamente.

II. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN EL ÁMBITO ESTATAL

1. CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

Nuestro ordenamiento jurídico, comenzando por la Carta Magna, está plagado de referencias a la discapacidad intelectual, si bien algunas de ellas adolecen de no haberse adaptado convenientemente al paso de los años por cuanto todavía exhiben, para aludir al fenómeno, un lenguaje trasnochado y a todas luces inadecuado. Así, por ejemplo, el artículo 49 de la Constitución Española todavía los califica de “disminuidos psíquicos” al proclamar el deber de los poderes públicos de realizar “una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración”, debiendo prestarles “la atención especializada que requieran”, así como dispensarles un especial amparo en lo relativo al “disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos”.

4. M. CRESPO CELDA, “Introducción a la adquisición de habilidades”, en *Curso ITF Entrenamiento de Tenistas Iniciantes e Intermedios*, ITF Academy, itf-academy.com, p. 2.

2. EL DEPORTE EN LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Sin duda, el punto de inflexión del cambio de modelo, no sólo en lo concerniente al lenguaje que ha de emplearse para referirse al fenómeno de la discapacidad, viene dado por la referida Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, incorporado plenamente a nuestro Derecho interno con su entrada en vigor en mayo de 2008. De esta norma se hace preciso destacar su artículo 30 rubricado “participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte”, que obliga a los Estados Partes a “alentar y promover la participación, en la mayor medida posible, de las personas con discapacidad en las actividades deportivas generales a todos los niveles” (art. 30.5.a); a “asegurar que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de organizar y desarrollar actividades deportivas y recreativas específicas para dichas personas y de participar en dichas actividades y, a ese fin, alentar a que se les ofrezca, en igualdad de condiciones con las demás, instrucción, formación y recursos adecuados” (art. 30.5.b); a “asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a instalaciones deportivas (...)” (art. 30.5.c); a que “tengan igual acceso con los demás niños y niñas a la participación en actividades lúdicas, recreativas, de esparcimiento y deportivas, incluidas las que se realicen dentro del sistema escolar” (art. 30.5.d); y a que “tengan acceso a los servicios de quienes participan en la organización de actividades recreativas, turísticas, de esparcimiento y deportivas” (art. 30.5.e)⁵.

3. EL DEPORTE EN LA LEY GENERAL DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE SU INCLUSIÓN SOCIAL

Manifestación del derecho fundamental a la igualdad, proclamada como uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico (art. 1.1 de la Constitución Española), a cuya conquista ha de ordenarse la actuación de los poderes públicos, promoviendo las condiciones adecuadas para que sea real y efectiva, y removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud (art. 9.2 de la Constitución Española), es la formulación negativa del derecho a la no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal (art. 14 de la Constitución Española), como la que representa para un individuo estar afectado por una discapacidad intelectual. Y así se reconoce en su dimensión positiva en la norma reguladora por excelencia del fenómeno de la discapacidad en España (el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social), cuyo artículo 7.1 dispone categóricamente que “las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que los demás ciudadanos conforme a nuestro ordenamiento

5. Sobre el influjo de la Convención Internacional en el ámbito del deporte, véase J. GÓMEZ VALLECILLO, *El deporte adaptado en el Derecho Español*, Reus, Madrid, 2019, pp. 19-23. El autor también se ocupa sintéticamente del marco regulatorio estatal (pp. 23 y ss.) y, también específicamente del de la Comunitat Valenciana (pp. 118-120).

jurídico”, que, en lo que hace al acceso al deporte, han de ser protegidos por las administraciones públicas “de forma especialmente intensa” (art. 7.3).

La norma reconoce la relevancia del deporte en cuanto factor que contribuye decisivamente a la superación de aquellas barreras, obstáculos y dificultades que lastran la plena integración de las personas con discapacidad intelectual. De ahí que se prevea que los servicios de ajuste personal y social que puedan arbitrarse no sólo se proyecten sobre el proceso de incorporación al mercado laboral, sino que puedan también perseguir su inclusión social, cultural y deportiva (art. 43.2 párrafo segundo), lo que consagra el carácter multidisciplinar, transversal y, en definitiva, universal de la red de instrumentos de apoyo que se ha de garantizar a las personas con discapacidad. De ahí que se plasme también en el artículo 50.1 su “derecho a los servicios sociales (...) de actividades culturales, deportivas, ocupación del ocio y del tiempo libre” como un aspecto más de su más genérico derecho a la protección social, que habrá de concretarse, “siempre que sea posible, de acuerdo con el principio de accesibilidad universal en las instalaciones y con los medios ordinarios puestos al servicio de la ciudadanía. Sólo cuando la especificidad y la necesidad de apoyos lo requieran, podrá establecerse, de forma subsidiaria o complementaria, servicios y actividades específicas” (art. 51.8).

De esta forma, la apuesta del legislador es el allanamiento de los obstáculos que erosionen la plena inclusión de las personas con discapacidad, pero siempre desde la óptica de una participación y convivencia inclusiva con el resto de ciudadanía, que hace de la segregación una medida extraordinaria y excepcional circunscrita a aquellas situaciones de discapacidad que, por su carácter extremo, imposibiliten a todas luces su pretendida integración.

4. LA DISCAPACIDAD EN LA LEY 10/1990, DE 15 DE OCTUBRE, DEL DEPORTE

La longevidad que peina la Ley estatal del Deporte se muestra en las escasísimas referencias al fenómeno de la discapacidad. Como era característico al tiempo de su promulgación, más que de discapacidad se habla de “minusvalía” adjetivada oportunamente para comprender la amplitud de esta realidad. Indudablemente, como en la Carta Magna, la discapacidad intelectual era por entonces designada como “minusvalía psíquica”. En coherencia con el mandato constitucional, el legislador estatal expresa que “es competencia de la Administración del Estado fomentar la práctica del deporte por las personas con minusvalías físicas, sensoriales, psíquicas y mixtas, al objeto de contribuir a su plena integración social” (art. 4.2).

Por lo que se refiere al asociacionismo característico del deporte, el artículo 34.1 autoriza excepcionalmente la constitución de federaciones polideportivas, con las condiciones que pueda establecer el Gobierno⁶, al objeto de abordar específicamente los distintos aspectos del deporte de las personas con

6. Artículo 40 de la Ley 10/1990.

discapacidad⁷, tales como, entre otras, la calificación y organización de actividades y competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal; la promoción general del deporte para este colectivo; y el diseño, elaboración y ejecución de planes de preparación para los deportistas con discapacidad que merezcan el reconocimiento de alto nivel⁸.

Más allá de la genérica referencia a la inclusión social en el artículo 4.2, la norma llamada a regular específicamente el fenómeno deportivo, quizá por no reflejar las concepciones más actuales sobre la discapacidad intelectual gestadas en el ámbito internacional, no deja traslucir iniciativa o previsión alguna que pueda contribuir a su consecución. Por el contrario, la regulación deja entrever una rendición en toda regla ante las seculares dificultades para hacer efectiva la integración del colectivo y, consecuentemente, un aislamiento y segregación del deporte para personas con discapacidad intelectual, para las que no se vislumbra programa o actuación que posibilite esa plena inclusión y participación en la práctica y competición deportiva ordinaria. Por consiguiente, el legislador se ha limitado a dar reconocimiento, como no podía ser de otra forma, al derecho de las personas con discapacidad al acceso a la práctica deportiva en sus distintas modalidades de aprendizaje, entrenamiento y competición.

5. LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL (FEDDI)

Constituida en 1993 al amparo de la Ley 10/1990, del Deporte, bajo la denominación prevista en el Real Decreto de Federaciones deportivas españolas

7. Artículo 34.1 de la Ley 10/1990. El artículo 1.5 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Federaciones Deportivas Españolas y Registro de Asociaciones Deportivas, prevé como *numerus clausus* la Federación Española de Minusválidos físicos, la Federación Española de Minusválidos psíquicos, la Federación Española de minusválidos sensoriales (invidentes), la Federación Española de Paralíticos cerebrales y la Federación Española de Sordos, sin perjuicio de que, siguiendo los criterios internacionales que puedan establecerse, puedan incorporarse otras nuevas. La propia Ley prevé que puedan todas ellas “constituir una confederación de ámbito nacional que coordinará las actividades comunes a las mismas”. A partir de esta previsión, fueron constituyéndose, con denominaciones semejantes, en los años sucesivos.
8. Artículo 33.1 de la Ley 10/1990. La norma se refiere en el artículo 48.6 al Comité Paralímpico Español, asociación sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica y declarada de utilidad pública, dedicada, del mismo modo que el Comité Olímpico Español, al desarrollo del movimiento olímpico y la difusión de los ideales olímpicos, a quien compete en particular “la inscripción y participación de los deportistas españoles en los Juegos Olímpicos, colabora en su preparación y estimula la práctica de las actividades representadas en dichos Juegos” cuando se trata de “deportistas con discapacidades físicas, sensoriales, psíquicas y cerebrales”. Sin embargo, en la Página Oficial del Comité Paralímpico Español (<https://www.paralimpicos.es/historia-del-deporte-paralimpico-en-espana>) que su creación respondió a la necesidad “de defender sus intereses como colectivo (...) desde la unidad de acción”, lo que da al Comité un aire de estructura confederativa (se califica explícitamente de “órgano de unión y coordinación de todo el deporte practicado en España por personas con discapacidad”) a la que sumar, como bien se infiere de su denominación, la asunción y defensa de los específicos principios del olimpismo.

(Federación Española de deportes para minusválidos psíquicos, FEDEMP)⁹, FEDDI encarna la máxima expresión del fenómeno asociativo deportivo a nivel estatal para las personas con discapacidad intelectual, por cuanto a ella compete “la organización, defensa y promoción del deporte” para este colectivo (art. 3.1 de sus Estatutos), descendiendo para ello, entre otras cosas, a la organización y autorización de actividades y competiciones oficiales de ámbito estatal (art. 9.A); al diseño, elaboración y ejecución, en colaboración con las Federaciones autonómicas, de los planes de preparación de los deportistas de alto nivel (art. 9.C); a la formación de técnicos deportivos (art. 9.E); al ejercicio de la potestad disciplinaria en las competiciones que caigan dentro de su ámbito de cognición (art. 9.G en relación con el art. 20.B); y al control de las subvenciones que puedan recibir las entidades deportivas en ella integradas (art. 9.H).

Si bien toda regulación estatutaria se halla condicionada por las previsiones que puedan establecer las normas especiales de rango jerárquico superior, los estatutos son siempre una buena oportunidad para ir más allá y, considerando su mayor juventud¹⁰, reflejar en ellos concepciones más modernas y apuestas más ambiciosas, todo ello con el propósito último de hacer efectiva esa plena inclusión de las personas con discapacidad intelectual, no sólo en la sociedad desde o a partir del deporte, sino también en el deporte, esto es, en las actividades y competiciones que en él se organizan.

A estos efectos, es de interés la previsión estatutaria (art. 61) de un Director Técnico o Coordinador Deportivo, a quien, “al objeto de una mayor coordinación, diligencia y sistemática colaboración” entre las distintas modalidades deportivas que en FEDDI tienen cabida¹¹, compete entre otras la tarea de “responsabilizarse de la dirección y control de los distintos programas

9. Por Resolución de 15 de junio de 1993, de la Secretaría de Estado-Presidencia del Consejo Superior de Deportes, se dispuso la publicación de los Estatutos de la Federación Española de Deportes para Minusválidos Psíquicos, que perdieron su vigencia en febrero de 2003. Con anterioridad, en 1998, contando con la autorización de la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes de 29 de octubre, abandonó su antigua denominación para adoptar la de Federación Española de Deportes para Discapacitados Intelectuales (FEDDI), siendo objeto de publicación sus Estatutos por Resolución de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes de 20 de septiembre de 2005. Mi agradecimiento a D. Miguel A. Sánchez, Secretario General de FEDDI, por haberme facilitado información de algunos extremos, como lo relativo al cambio de denominación, cuya precisa datación no resulta posible obtener mediante consulta del Boletín Oficial del Estado.

10. La versión que hemos manejado, procedente de la página web de FEDDI, está fechada el 17 de septiembre de 2018 y su Disposición Final proclama que su entrada en vigor se producirá al día siguiente de su publicación en el BOE. Lo cierto es que en el BOE se vienen publicando distintas modificaciones estatutarias y la más próxima es la de 7 de febrero de 2019, que lo es de la Resolución de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes de 23 de enero de 2019.

11. El artículo 71, en la redacción visada por Resolución de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes de 17 de enero de 2014 y publicada en el BOE de 3 de febrero, señala, a modo de *numerus apertus* (como bien se infiere de la expresión “en principio”), las de atletismo, baloncesto, equitación, esquí alpino, esquí nórdico, balonmano, fútbol, fútbol sala, gimnasia rítmica, natación, tenis, tenis de mesa, ciclismo, deporte adaptado y pádel.

deportivos que se realicen desde la FEDDI” (art. 61.E), coordinando al personal implicado en su ejecución en la permanente búsqueda de “la unificación de métodos, sistemas y criterios” (art. 61.D).

Con toda seguridad, las cualidades más o menos emprendedoras o revolucionarias de la persona escogida para el puesto, reflejadas en el proyecto deportivo que sea capaz de urdir, serán determinantes para la confección de una oferta de enseñanza, entrenamiento y competiciones deportivas que, más allá de acercar el deporte a las personas con discapacidad intelectual, allanando cuantas dificultades puedan enfrentar, posibiliten también esa experiencia de convivencia deportiva, mucho más inclusiva e integradora, con personas carentes de discapacidad.

III. “CORPUS” NORMATIVO DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN LA COMUNITAT VALENCIANA

1. ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

El Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana¹² señala que “la Generalitat defenderá y promoverá los derechos sociales de los valencianos que representan un ámbito inseparable del respeto de los valores y derechos universales de las personas” (art. 10.1), poniendo el acento en que “la actuación de la Generalitat se centrará primordialmente en (...) la no discriminación y derechos de las personas con discapacidad y sus familias a la igualdad de oportunidades, a la integración y a la accesibilidad universal en cualquier ámbito de la vida pública, social, educativa o económica” (art. 10.3)¹³.

Desde luego, la explícita mención a “cualquier ámbito de la vida” comporta sin dificultad la presencia del deporte en todas las vertientes en las que comúnmente se manifiesta en la vida social, esto es, la práctica libre, el entrenamiento bajo la tutela de profesionales debidamente preparados (no sólo en los requerimientos generales y específicos de una determinada modalidad deportiva, sino en su adaptación a las necesidades concretas que requieran las personas con discapacidad intelectual en atención al estado de la Ciencia en cada momento) y el acceso a la plena realización personal y colectiva de las personas con discapacidad intelectual a través de los logros que la competición, también debidamente adaptada, sea capaz de proporcionarles.

La disposición estatutaria fragmentariamente reproducida alude (art. 10.2) a la elaboración de una Carta de Derechos Sociales de la Comunitat Valenciana. A ella se refiere también el artículo 13.1 y 2 del Estatuto de Autonomía al significar que “1. La Generalitat, conforme a la Carta de Derechos Sociales,

12. Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio.

13. El contenido de este precepto estatutario nada se parece a su versión originaria, completamente remozada por efecto del artículo 13 de la Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, de Reforma de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.

garantizará en todo caso a toda persona afectada de discapacidad, el derecho a las prestaciones públicas necesarias para asegurar su autonomía personal, su integración socioprofesional y su participación en la vida social de la comunidad. 2. La Generalitat procurará a las personas afectadas de discapacidad su integración por medio de una política de igualdad de oportunidades, mediante medidas de acción positiva, y garantizará la accesibilidad espacial de las instalaciones, edificios y servicios públicos”.

Esta declaración de intenciones de la Administración autonómica valenciana, que se relaciona estrechamente con la competencia exclusiva de la Generalitat en materia de “instituciones públicas de protección y ayuda de personas con discapacidad” (art. 49.1.27.^a), obliga a no pocas cosas en relación con el deporte: el diseño y ejecución (“procurará”) de políticas activas de promoción de su práctica, entrenamiento y competición, todo ello con las debidas adaptaciones (“accesibilidad”), en régimen de igualdad con las que puedan contemplarse para otros segmentos poblacionales no aquejados por patologías o afecciones causantes de discapacidad intelectual. También se puede inferir, en la medida en que el deporte se revela como un cauce de “participación en la vida social de la comunidad”, que, por añadidura, fortalece su “autonomía personal” y su “integración socioprofesional”, el deber de los poderes públicos de sufragar económicamente estas políticas o, en su caso, de conceder “prestaciones públicas necesarias” que posibiliten o hagan verdaderamente accesible a las personas con discapacidad intelectual el deporte en las vertientes de práctica libre, entrenamiento y competición.

2. CARTA DE LOS DERECHOS SOCIALES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

El apartado II de su Preámbulo pone de relieve que “el objeto de la carta es el establecimiento del conjunto de principios, derechos y directrices que informen la actuación pública de la Generalitat en el ámbito de la política social”. Señala asimismo que “se ha optado, en términos generales, por la enunciación de los derechos y, en su caso, de las medidas que en todo caso habrán de ser adoptadas para la garantía de los mismos, remitiendo su desarrollo a las normas específicas que regulen cada uno de los derechos”. Ahora bien, “en lo que se refiere al desarrollo ulterior, se ha de tener en cuenta que, en algunos casos, la Comunitat Valenciana ya cuenta con una regulación específica, como la Ley que regula el Estatuto de las Personas con Discapacidad, la Ley de Protección Integral de la Infancia y Adolescencia, la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres, la Ley de Integración de las Personas Inmigrantes, la Ley de Protección a la Maternidad o la Ley de Juventud”.

De ello se desprende que, aunque el título IV está dedicado a las personas con discapacidad, lo cierto es que en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana ya preexistía una disposición de carácter general sobre el particular, por lo que esta Carta, al margen de las grandilocuencias meramente dialécticas que exhibe, no es portadora de significativos avances en lo concerniente a la protección y atención de las personas con discapacidad.

El artículo 6.3, específicamente en relación con los menores de edad, proclama que “las entidades públicas promoverán las acciones y medidas necesarias para facilitar a las personas menores de edad que padezcan una enfermedad prolongada, o con algún tipo de discapacidad, su integración y atención en los ámbitos familiar, escolar, social, laboral y sanitario”, lo que patentiza que las personas con discapacidad, precisamente por tal razón, precisan de una atención que, en aras de su mejor integración y participación en la vida social, habrá de concretarse en aquellas actuaciones que la faciliten y posibiliten en mayor medida, fomentando al máximo su autonomía en la medida en que el nivel o grado de afección lo permita, a fin de, en último término, minimizar todo lo que sea posible las barreras de toda índole que por causa de su discapacidad padecen.

La norma, en todo caso, no olvida al entorno de las personas con discapacidad, que, precisamente por ser el gran protagonista en la encomiable tarea de acompañamiento en la que, en definitiva, se resuelven las funciones de atención y protección, experimenta por tal razón o, al menos, corre el riesgo de sufrir, si no discriminación, sí al menos restricciones o limitaciones que deben ser allanadas por los poderes públicos. De ahí que el artículo 32.3 de la Carta establezca que “la Generalitat promoverá el desarrollo de la red de servicios sociales que atiende a las personas menores de edad, a las personas mayores, a las personas con discapacidad y a las personas en situación de dependencia, a los efectos de garantizar la compatibilidad de la vida familiar y profesional y su mejor atención”.

El desarrollo de los principios anunciados en el texto estatutario se contiene, como ya se ha dicho, en el Título IV (arts. 40 a 45) sin especiales novedades: la asunción por parte de la Generalitat de la garantía de no discriminación para las personas con discapacidad y sus familias, así como el reconocimiento de los derechos “a la igualdad de oportunidades, a la integración y a la accesibilidad universal en cualquier ámbito de la vida pública, social, educativa o laboral” (art. 40.1); y la apuesta por “la transversalidad de las políticas en materia de discapacidad” (art. 40.2), lo que refuerza la concepción de que la legislación autonómica sectorial (por materias) habrá de contener previsiones específicas dentro de su concreto ámbito regulatorio, por ejemplo en el campo del deporte, posibilitando así, con las debidas adaptaciones, una integración e incorporación a la vida ciudadana en condiciones de plenitud y, en definitiva, una estricta y comprometida observancia de lo proclamado en el artículo 40.3 de la Carta: “las administraciones públicas de la Generalitat, en todo caso, adecuarán sus actuaciones en esta materia a los principios de no discriminación, autonomía, participación, integración, igualdad de oportunidades y responsabilidad pública”.

De especial interés es el reconocimiento que la Carta hace de derechos sociales en materia educativa. En concreto se señala que habrá de dispensarse a las personas con discapacidad “la atención educativa específica que por sus necesidades especiales requieran” (art. 42.1), poniéndose a su disposición “los recursos humanos, materiales y didácticos necesarios para la

efectiva inclusión del alumnado con necesidades educativas especiales”. Quizá la norma esté pensando en todo menos en deporte, pero a nadie escapa que el deporte está presente en todas las etapas educativas obligatorias de nuestro sistema¹⁴. Por tal razón, las personas con discapacidad intelectual tienen derecho a una atención específica en este campo, lo que inevitablemente comporta el diseño y ejecución de una programación propia conducida por profesionales de la enseñanza de la educación física, que, por sí solos o en colaboración con otros formados en educación especial y atención a la diversidad, dé a las personas con discapacidad intelectual la respuesta que garantice la efectividad de los principios contenidos en el artículo 40.3 de la Carta.

“El derecho a la accesibilidad universal en cualquier ámbito de la vida pública, social, educativa o económica y, específicamente, la accesibilidad espacial en las instalaciones, edificios y servicios públicos” (artículo 43) impone a los poderes públicos algo más que la ya clásica habilitación de barandillas, pasamanos y rampas. La práctica del deporte por parte de las personas con discapacidad puede eventualmente obligar a una adaptación de los espacios, pero también exige incorporar el material que las nuevas orientaciones metodológicas para la superación de barreras y el establecimiento de metas y objetivos adaptados a sus condiciones propugnan. Ello exige estar a la última y, sobre todo, asegurar la actuación coordinada de profesionales de la educación física y de las necesidades educativas especiales que, en cada caso concreto, requiera la persona con discapacidad intelectual.

Y es que toda esa programación y ejecución adaptada, como es natural, requiere recursos que no siempre comparecen. A ellos se refiere específicamente el artículo 44 de la Carta bajo la denominación de “ayudas necesarias”, que “podrán consistir en prestaciones económicas, asistencias técnicas, asistencia personal, servicios especializados y ayudas y servicios auxiliares para la comunicación”.

Esta previsión, que parece articular las ayudas en dinerarias (“prestaciones económicas”) y en especie (“asistencias técnicas, asistencia personal, servicios especializados y ayudas y servicios auxiliares para la comunicación”), si se relaciona con lo prevenido en el artículo 45 de la Carta, dota a la protección y atención que merecen las personas con discapacidad intelectual de una dimensión universal, que va desde luego más allá de esa aparente limitación que deja traslucir el comienzo del artículo 42 de la Carta: “en cualquiera de las etapas educativas, obligatorias y no obligatorias, en centros de titularidad pública de la Generalitat, centros de otra titularidad pública convenidos con

14. Los artículos 18.3, 24.4 y 25.6 de la Ley Orgánica de Educación (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo) prevén que los alumnos de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria, en todos y cada uno de sus cursos, cursen el bloque específico de Educación Física (apartado a). Esta obligatoriedad se extiende también al 1.º Curso de Bachillerato (art. 34 bis.4, apartado a). No así en 2.º de Bachillerato, donde todo lo más podrá formar parte del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica “en función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca cada Administración educativa y, en su caso, de la oferta de los centros docentes” (art. 34 ter.5 párrafo segundo).

la Generalitat o centros privados concertados con la Generalitat, a las personas con discapacidad se garantizarán los siguientes derechos (...)."

En efecto, las prestaciones económicas pueden servir para sufragar el coste que represente la adaptación de la práctica deportiva a las necesidades específicas de las personas con discapacidad intelectual por parte de los centros enumerados en el artículo 42. Sin embargo, el hecho de que el artículo 45 prevea que "la Generalitat establecerá medidas económicas, sociales u otras necesarias para aquellas personas con algún tipo de discapacidad que contribuyan a fomentar su autonomía personal, su integración socioprofesional y su participación en la vida social de la comunidad" no excluye, a nuestro juicio, que el coste económico de una práctica deportiva adaptada en centros privados que no forman parte del régimen de conciertos educativos pueda ser específicamente sostenida con fondos públicos, debiendo el solicitante justificar en qué medida contribuye a los fines que la Carta de Derechos Sociales pretende amparar.

3. ESTATUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Por Ley 11/2003, de 10 de abril, de las Cortes Valencianas, ampliamente modificada por Ley 9/2018, de 24 de abril con vistas a acomodarla a "las directrices de la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad"¹⁵, aprobada el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), ratificada por España el 3 de diciembre de 2007 y en vigor desde el 3 de mayo de 2008" (apartado III del Preámbulo), se ha previsto en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana un ambicioso Estatuto para las personas con discapacidad al objeto de contribuir al desarrollo de las competencias estatutarias sobre la materia (apartado II del Preámbulo). Su propósito no se queda en la mera formulación de los principios rectores de la actuación de la Generalitat en lo que hace a "la prevención, tratamiento e inclusión de las personas con discapacidad", entre otros, "los de autonomía, participación, el principio de inclusión y el de responsabilidad pública", sino que alcanza al "reconocimiento de auténticos derechos subjetivos", para cuyo ejercicio efectivo se "procurará paulatinamente aumentar la

15. Cuyo artículo 30.5 formula el reconocimiento de las personas con discapacidad a "participar en igualdad de condiciones con las demás en actividades recreativas, de esparcimiento y deportivas", lo que obliga a los Estados Partes a: "a) Alentar y promover la participación, en la mayor medida posible, de las personas con discapacidad en las actividades deportivas generales a todos los niveles; b) Asegurar que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de organizar y desarrollar actividades deportivas y recreativas específicas para dichas personas y de participar en dichas actividades y, a ese fin, alentar a que se les ofrezca, en igualdad de condiciones con las demás, instrucción, formación y recursos adecuados; c) Asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a instalaciones deportivas, recreativas y turísticas; d) Asegurar que los niños y las niñas con discapacidad tengan igual acceso con los demás niños y niñas a la participación en actividades lúdicas, recreativas, de esparcimiento y deportivas, incluidas las que se realicen dentro del sistema escolar; e) Asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a los servicios de quienes participan en la organización de actividades recreativas, turísticas, de esparcimiento y deportivas".

dotación económica presupuestaria (...) para que las personas con discapacidad puedan disfrutar del principio de igualdad de oportunidades” (apartado II del Preámbulo).

El texto normativo autonómico se acomoda sin dificultad a las nuevas orientaciones del tratamiento de la discapacidad, del que fue pionera la referida Convención internacional y que condujo al legislador estatal a la refundición de diversas normas precedentes en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre (Ley General de Derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social).

Dejando de lado los aspectos de prevención de la discapacidad, difícilmente acomodables a la realidad de la discapacidad intelectual, de marcado origen genético, la norma persigue el propósito de “intentar mejorar las potencialidades de las personas, favorecer la interacción entre la persona afectada y su entorno con la eliminación de obstáculos y la facilitación de ayudas de distinto tipo” (apartado IV del Preámbulo). Sin embargo, la anticipación en el diagnóstico y, una vez concretado, la estimulación precoz da un protagonismo decisivo a la actividad física y el deporte, que se erigen así en instrumentos a través de los cuales proteger la salud y encauzar el progreso y, en definitiva, la integración y participación de las personas con discapacidad intelectual en el ámbito social en términos de procurarles “autosuficiencia e independencia con los soportes y ayudas necesarios por parte de los poderes públicos” (apartado V del Preámbulo), todo ello para hacer realidad el fomento del “desarrollo de las capacidades individuales de las personas con discapacidad a cualquier edad y desde la aparición de la discapacidad” (art. 15.2.c) del Estatuto), así como “la puesta en marcha de opciones educativas tendentes a conseguir el desarrollo integral del alumnado con discapacidad” (art. 19.f) del Estatuto).

El texto articulado dedica su artículo 69 al aspecto deportivo: “las entidades locales en el ámbito de sus respectivas competencias, la conselleria u organismo competente en materia deportiva y/o en materia de acción social de la Generalidad Valenciana y, en su caso, las asociaciones o entidades privadas sin ánimo de lucro, promoverán la realización de programas deportivos que fomenten la inclusión social de las personas con discapacidad y su desarrollo personal”.

Sin embargo, no hubiera sido necesario, pues la estrecha relación entre el propósito, diseminado por toda la norma, de la inclusión social de las personas con discapacidad con todo lo que envuelve el deporte se ha de dar por descontada. Y es que si reconocemos que “el bienestar y calidad de vida de las personas con discapacidad” se logra más fácilmente o, cuanto menos, mejora sustancialmente a través del deporte; si consideramos que el deporte contribuye a dispensarles “autonomía, habilitación o, en su caso, rehabilitación”¹⁶; si pensamos que el deporte favorece “su participación e inclusión

16. Estos conceptos que nos ofrece una norma jurídica pueden sin duda relacionarse con el constructo de “autodeterminación” de las personas con discapacidad intelectual. Entre los factores intrapersonales que, junto con los ambientales, lo condicionan está la

plenas y efectivas en la sociedad”; si concluimos que abrirles la senda de la práctica, entrenamiento y competición deportiva asegura de forma efectiva “el derecho a la igualdad y dignidad reconocido por la Constitución Española” (art. 1.1 del Estatuto), entonces la actuación de las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana no debe descuidar este aspecto, arbitrando políticas y programas transversales (art. 4.10 del Estatuto) que evidencien esa asunción y compromiso con “la responsabilidad pública en la dotación de los medios y recursos necesarios para alcanzar la plena realización de los principios enumerados en el presente artículos” (art. 4.11 del Estatuto). En este sentido, la relación del deporte con la salud encuentra incluso su plasmación en la Constitución Española (art. 43.3) dentro de los principios rectores de la política social y económica, por lo que, cuando el Estatuto dispone que “la administración de la Generalitat llevará a cabo las actuaciones necesarias tendentes a garantizar a las personas con diversidad funcional o discapacidad la habilitación y la rehabilitación integral necesarias para mejorar, mantener o compensar su estado físico, psíquico o sensorial”, la previsión de programas que contemplen la práctica, el entrenamiento y la competición deportiva debe estar incorporada a ese elenco de “actuaciones necesarias” que mejoren, mantengan o compensen “su estado físico, psíquico o sensorial” (art. 17.1 del Estatuto)¹⁷.

inteligencia, mermada en estas personas, lo que incide decisivamente en su “autodeterminación”, esto es, en su toma de decisiones y en la expresión de sus preferencias. Sin embargo, estos aspectos pueden verse sustancialmente mejorados a través de la práctica del deporte. Vid. al respecto J. MCGUIRE y J. MCDONNELL, “Relationships between recreation and levels of self-determination for adolescents and young adults with disabilities”, en *Career Development and Transition for Exceptional Individuals*, núm. 31.3 (2008), pp. 154-163. Esta percepción está presente en el propio entorno de las personas con discapacidad intelectual, conscientes de los múltiples beneficios físicos, psicológicos y sociales que el deporte les proporciona. Numerosas referencias al respecto proporciona el estudio de A. GARCÍA MOLTÓ y M. OVEJERO BRUNA, “Satisfacción vital, autodeterminación y práctica deportiva en las personas con discapacidad intelectual”, en *Revista de Psicología del Deporte*, núm. 26.2 (2017), pp. 13-19, <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=235152048002>, que concluyen, tras el estudio de campo practicado, que “los participantes identifican que la práctica deportiva es una actividad placentera, saludable y que permite relacionarse con los demás”, al tiempo que es mayor el nivel de “autodeterminación” frente a los que “no practican ningún tipo de deporte”. En definitiva, subrayan “la importancia de que las personas con discapacidad intelectual tengan acceso al deporte que garantiza la actividad física y los efectos positivos de la misma sobre la salud”. Véase también sobre los concretos beneficios que el deporte proporciona a las personas con discapacidad intelectual el trabajo académico de L. M. RODRÍGUEZ MARTÍN, *Las personas con discapacidad y su integración en el deporte*, Universidad de La Laguna, Tenerife, 2015, pp. 16 y s.; y el de A. M. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ y O. R. A. QUINTANILLA ACUÑA, *Derecho y discapacidad: el deporte y la actividad física como agentes rehabilitadores y de integración social en el ordenamiento jurídico nacional e internacional*, Universidad de Chile, Santiago de Chile, 2016, pp. 49-51, <http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/142500/Derecho-y-discapacidad.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

17. El concepto legal de “rehabilitación” se expresa en el artículo 17.1 párrafo segundo del Estatuto: “se entiende por rehabilitación el proceso orientado a la recuperación, el mantenimiento o la adquisición de una función o una habilitación perdida, reducida o no adquirida, teniendo por objeto la prestación de servicios y ayudas técnicas dirigidas a la consecución de la recuperación de las personas con discapacidad, la minoración de las

De entre las actuaciones que corresponde impulsar a la Generalitat, nos interesa destacar las siguientes: “establecer los criterios de calidad que han de cumplir todos los centros y servicios que actúen en el ámbito de las personas con discapacidad, con el fin de garantizar las condiciones en que éstos son atendidos” (art. 5.d) del Estatuto); y “asesorar y apoyar, técnica y económicamente, a las entidades locales y organizaciones y asociaciones públicas y privadas, especialmente las de iniciativa social sin ánimo de lucro, que se decidan a colaborar en la creación, gestión, promoción y desarrollo de planes y programas de promoción de las personas con discapacidad; en la creación y gestión de los centros y en la prestación de los servicios regulados en la presente ley (...)” (art. 5.e).

Así las cosas, la atención de las personas con discapacidad, también en su vertiente deportiva, sea en el contexto escolar que fuera de él¹⁸, exige la

secuelas resultantes y el desarrollo de las capacidades de que dispone la persona con diversidad funcional, para que pueda alcanzar y mantener la máxima independencia y la inclusión y la participación plena en todos los aspectos de la vida”. Que el deporte, con una programación adecuada a las afecciones de las personas con discapacidad intelectual, pueda mejorar el estado de las funciones o habilitaciones más afectadas, contribuyendo, en definitiva, al desarrollo de sus capacidades y a la obtención de unos mayores y mejores estándares de independencia y de integración, es algo que cae de su peso. Valga como muestra el trabajo de L. LA TERZA, “Discapacidad intelectual y deporte. Análisis sobre la cantidad de jóvenes discapacitados intelectuales que practican deportes fuera del ámbito escolar y/o formativo”, en *EFDeportes.com. Revista Digital*, núm. 158 (2011), <https://www.efdeportes.com/efd158/discapacidad-intelectual-y-deporte.htm>, pone en relación el concepto de “rehabilitación” formulado por la Organización Mundial de la Salud con el deporte, concluyendo que, “si bien el deporte no tiene una relación directa con la rehabilitación se estima que como actividad física se incorpora dentro de los parámetros de esta definición para posibilitar la recuperación de algunas funciones tanto a nivel biológico como social a efectos de adaptar al individuo al medio e integrarse al mismo y a la sociedad. De hecho, los comienzos de la relación del deporte con la discapacidad fueron mediados por un proceso de rehabilitación. A través de la actividad deportiva o recreativa se desarrollan, por medio del movimiento, las capacidades biopsicosociales remanentes de forma activa e integradora, permitiendo también a quien la practica entrar en contacto con la salud y la capacidad dejando de lado la deficiencia, conociendo sus posibilidades y limitaciones y permitiéndole entrar en el ámbito social como individuo activo”. La sensación de independencia y de libertad que crea en las personas con discapacidad intelectual la práctica del deporte es especialmente puesta de relieve: “siendo el deporte una actividad que usualmente se practica por preferencia es de creer que sea un espacio vital para el desarrollo de las personas con discapacidad en el cual se sientan independientes y libres desarrollando así mejoras en su autoestima y pertenencias a espacios propios en los cuales se desarrollan a partir de sus capacidades remanentes teniendo muchas veces merecidos y placenteros logros”. Concluye la autora con que el deporte, “más allá de ser un instrumento parte de la rehabilitación en algunos casos, es un medio para establecer bienestar tanto nivel físico como mental o psíquico y para contribuir a la integración del individuo discapacitado a la sociedad. En este proceso es también un punto importante el apoyo de las familias, la evasión de la sobreprotección y la confianza en la capacidad de las personas con discapacidad para realizar actividades independientes y conseguir lo que se propongan”.

18. Los compromisos y mandatos reflejados en el Estatuto de las Personas con Discapacidad no sólo operan o son vinculantes en el ámbito de la Administración pública, sino que alcanza también a las entidades privadas. Así resulta del artículo 33 del Estatuto cuando

observancia de unos estándares de calidad que van más allá del encomiable voluntarismo por ofrecer ayuda a los segmentos de la sociedad percibidos como de mayor vulnerabilidad, por lo que la Generalitat, con independencia del carácter público o privado de los promotores de acciones pretendidamente ordenadas a mejorar su atención y bienestar, debe estar siempre vigilante a que los prestadores de estos servicios reúnan los requerimientos de titulación y experiencia indispensables¹⁹. Además, cualquiera que sea la naturaleza pública o privada de las entidades que conduzcan estas acciones, tienen por esta sola razón derecho a recibir el sostén técnico y económico que sea preciso para asegurar la continuidad de los programas que gestionen²⁰, al margen de las prestaciones económicas individualizadas que puedan arbitrarse para la introducción de la práctica, entrenamiento y competición deportiva, que tan beneficiosos se perciben para el desarrollo, la inclusión y la participación en la vida social de las personas con discapacidad intelectual²¹.

4. LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN LA REGULACIÓN DEL DEPORTE EN LA COMUNITAT VALENCIANA

Las dos normas fundamentales en materia de deporte en la Comunitat Valenciana son la Ley 2/2011, de 22 de marzo, del Deporte y la Actividad Física de la Comunitat Valenciana y el Decreto 2/2018, de 12 de enero, por el que se regulan las entidades deportivas de la Comunitat Valenciana.

dispone que “las entidades locales en su ámbito territorial, la conselleria u organismo competente en materia de acción social de la Generalidad Valenciana y, en su caso, las asociaciones o entidades privadas sin ánimo de lucro, promoverán la realización de programas de ocio y tiempo libre que, destinados a personas con discapacidad, fomenten su inclusión social y su desarrollo personal”.

19. En este orden de cosas, ahonda el artículo 18.1 del Estatuto, bajo la rúbrica “actuaciones en materia educativa” en el compromiso de la Generalitat “por el efectivo disfrute del derecho de las personas con discapacidad o diversidad funcional a una educación pública, inclusiva y de calidad, así como a la formación a lo largo de la vida, sin discriminación por motivo o por razón de tal circunstancia y sobre la base de la igualdad de oportunidades, siendo los encargados de garantizar una política de fomento que asegure el proceso educativo adecuado, la adopción de ajustes razonables en función de las necesidades individuales y facilite las medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión”. A tal fin, es vital la tarea de “formar a profesionales y personal que trabajen en todos los niveles educativos. Esa formación incluirá la toma de conciencia sobre la discapacidad y el uso de modos, medios y formatos de comunicación aumentativos y alternativos apropiados, y de técnicas y materiales educativos para apoyar a las personas con discapacidad o diversidad funcional” (art. 18.2, siguiendo la estela del art. 24.4 de la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad).
20. Los artículos 45.1 y 46 del Estatuto deja un espacio a “la iniciativa privada sin ánimo de lucro” en lo que hace al desarrollo de actividades beneficiosas para las personas con discapacidad, entre las que indudablemente están las de carácter deportivo.
21. El catálogo de fines a los que estas prestaciones económicas individuales han de estar asociadas es ciertamente amplio y, en consecuencia, no entraña propiamente un *numerus clausus*. El otorgamiento de ayudas individuales ordenadas al fomento del deporte en cualquiera de sus vertientes responde sin dificultad al ideal de inclusión social al que se refiere constantemente el artículo 36.1 del Estatuto.

La Ley 2/2011 nos recuerda en su Preámbulo que, por un lado, su promulgación responde al ejercicio de la competencia exclusiva de la Generalitat en materia de deportes y ocio; y, por otro, que el deporte y la actividad física entrañan disciplinas especialmente sensibles a los cambios sociales hasta el punto de que en la Carta Europea del Deporte se da cabida en ellas a “todas las actividades físicas con finalidad de expresión o mejora de la condición física y psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales o el logro de resultados en competiciones de todos los niveles”.

No abundan en el texto articulado las referencias expresas al fenómeno de la discapacidad. Tan solo el artículo 3, al formular las líneas generales de actuación de la política de la Generalitat en materia deportiva, señala en su número 32 la de “fomentar el deporte y la actividad física de las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial y de todos aquellos otros colectivos que precisen de especial atención”, lo que entronca directamente con el contenido del artículo 69 del Estatuto de las Personas con Discapacidad, que hablaba de promover “la realización de programas deportivos que fomenten la inclusión social de las personas con discapacidad y su desarrollo personal”.

También, en lo relativo a las características de las instalaciones, equipamientos e infraestructuras deportivas, el artículo 86.1.g) de la Ley 2/2011 dispone que la Normativa Básica de Instalaciones y Equipamientos Deportivos, aprobada por Decreto del Consell, regulará los “criterios que faciliten el acceso y utilización a las personas con discapacidad”.

Además de la genérica declaración de intenciones del artículo 3.32 de la Ley 2/2011, con independencia de la voluntarista implicación que cada federación deportiva autonómica pueda exhibir en lo concerniente al fomento de la práctica de las modalidades deportivas que le competen por personas con discapacidad, se prevé en el artículo 62.1 de la Ley 2/2011 la existencia de “federaciones de deportes adaptados y de discapacitados intelectuales de la Comunitat Valenciana”, lo que quizá pueda explicarse en la necesidad y conveniencia de dar una específica respuesta deportiva al complejo fenómeno de la discapacidad, al tiempo que se persigue el propósito de cubrir una eventual preterición hacia este segmento social por parte de las entidades rectoras de las principales disciplinas deportivas. Por su parte, el Decreto 2/2018 no contiene más referencia a la discapacidad que reiterar en el artículo 37.2 lo establecido en el 62.1 de la Ley 2/2011, con lo que el marco normativo al que se sujeta la práctica, el entrenamiento y la competición deportiva para personas con discapacidad es ciertamente paupérrimo.

A nuestro juicio, este planteamiento revela el aislamiento y segregación en el que la discapacidad sigue anclada por más que se la relacione, muchas veces decorativamente, con los conceptos de integración e inclusión por los que decididamente, siquiera sea en una dimensión puramente teórica, apuesta el marco normativo que, siguiendo la estela de la Convención internacional, rige para la discapacidad en la Comunitat Valenciana. La mera existencia de una única Federación de Deportes para Personas con Discapacidad intelectual y no, en cambio, la previsión de Secciones específicas para abordar su

problemática y singularidad en el seno de las Federaciones “ordinarias” de cada modalidad deportiva, muestra bien a las claras que el fundamento aglutinador se halla en la “discapacidad” y no en la “singularidad” propia de cada disciplina deportiva, que es la que en el ámbito del deporte requiere, de acuerdo con sus características intrínsecas, una respuesta diferenciada.

La regulación de la discapacidad en la Comunitat Valenciana permite acometer un impulso más ambicioso que no se reduzca a un conformista “que las personas con discapacidad hagan deporte”, como podría resultar del tenor del artículo 3.32 de la Ley 2/2011 (“fomentar el deporte y la actividad física de las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial y de todos aquellos otros colectivos que precisen de especial atención”), sino ir más allá, entroncando directamente con el espíritu que destila el contenido del artículo 69 del Estatuto de las Personas con Discapacidad, que hablaba de promover “la realización de programas deportivos que fomenten la inclusión social de las personas con discapacidad y su desarrollo personal”.

Esta “inclusión social” pasa por abrirles la puerta de la práctica, entrenamiento y competición deportiva junto a personas no aquejadas de discapacidad intelectual, lo que sin dificultad genera un clima de solidaridad y beneficios mutuos para todos los deportistas, que lo son con independencia de los “talentos” con los que cada cual haya sido agraciado por la Madre Naturaleza. Este planteamiento es especialmente trasladable a la práctica de los deportes de equipo, en los que las carencias de unos pueden bien ser compensadas por la excelencia de otros. No se pretende ni es factible imponer a todas las entidades deportivas un altruismo lacrimógeno o sensiblero para ganarse notoriedad periodística o erigirse en modelo social a imitar al incluir de manera generalizada en todos sus programas y equipos personas con discapacidad intelectual, sino en animarles a promover de manera efectiva esa íntegra y completa inclusión del fenómeno de la discapacidad en todas las vertientes en las que se presenta el deporte. De esta forma, sin dejar de reconocer que la apuesta por la tecnificación y la consecución de las más altas cotas en el terreno agonístico, valores también consagrados en la legislación vigente²², impide configurar un verdadero y coercitivo “derecho a la inclusión deportiva” que pueda ser exigido a las entidades deportivas integradas en el deporte federado (algo que sería contrario al subyacente principio de la discrecionalidad técnica en la conformación de las plantillas o en la disposición de las alineaciones de cada encuentro), las Administraciones Públicas tienen en su mano instrumentos

22. Véase, por ejemplo, las medidas de protección y apoyo a los deportistas (y equipos o selecciones, ex art. 38 de la Ley 2/2011) de élite anticipadas en los artículos 3.14, 8.1) y m) y 12 de la Ley 2/2011 y concretadas en el artículo 17, entre ellas aquellas “que favorezcan su preparación y entrenamiento deportivo” (apartado d) o “la inclusión en programas de tecnificación deportiva y planes especiales de preparación” (apartado f), que, definidos legalmente como “un conjunto de acciones de carácter multidisciplinar, basadas en las ciencias aplicadas al deporte, (...) para complementar la preparación con vistas a alcanzar el máximo rendimiento deportivo”, presuponen las más de las veces un aislamiento, individual o colectivo, de los deportistas de mayor nivel a los fines de hacer explotar al máximo sus innatas cualidades deportivas.

para alimentar de forma más efectiva la concienciación colectiva y social de las entidades deportivas, que no siempre termina de arraigar a través de vanas (por solemnes y efectistas) formulaciones legales²³.

5. LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN LA COMUNITAT VALENCIANA

5.1. *La necesidad de adaptar su normativa interna a las exigencias del Decreto 2/2018*

Como ya se ha significado, tanto en la Ley 2/2011 como en el Decreto 2/2018 se prevé la existencia de dos federaciones deportivas relacionadas con el fenómeno de la discapacidad: la Federación de Deportes Adaptados de la Comunitat Valenciana (FESA)²⁴ y la Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual de la Comunitat Valenciana (FEDI-CV), en cuyo régimen jurídico interesa detenerse.

Como Federación Deportiva que es constituye una asociación privada sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica y capacidad de obrar, integrada por personas físicas y jurídicas distribuidas en estamentos (deportistas, técnicos, árbitros y aquellos singulares que puedan preverse estatutariamente), siendo su fin prioritario “la promoción, tutela, organización y control de sus respectivas modalidades y especialidades deportivas dentro del ámbito territorial de la Comunitat Valenciana” (art. 61.1 de la Ley 2/2011 y art. 36.1 del Decreto 2/2018).

El régimen jurídico al que se someten en su actuación y funcionamiento es en esencia la Ley 2/2011, el Decreto 2/2018, sus Estatutos y Reglamentos, sin perjuicio de la aplicación supletoria de las leyes y reglamentos de ámbito estatal, así como de los estatutos y reglamentos de la Federación nacional a la que puedan estar adscritos (art. 64.1 de la Ley 2/2011 y art. 38.1 del Decreto 2/2018). Como es natural, la singularidad de cada Federación deportiva se expresa y pone de manifiesto a través de sus Estatutos, que, en el caso de FEDI-CV, están aparentemente trasnochados, vulnerando con creces la Disposición Transitoria Primera del Decreto 2/2018, que establecía un plazo de dieciocho meses, a contar desde su entrada en vigor, para que las federaciones deportivas de la Comunitat Valenciana adaptasen a él sus Estatutos (autorizados por escritura Notarial de fecha 22 de julio de 1998, accesibles en su página web

23. Poderoso caballero es Don Dinero. Las ayudas y subvenciones económicas de la Dirección General de Deporte a las federaciones y entidades deportivas que fomenten una verdadera inclusión de las personas con discapacidad intelectual en sus programas y actividades (art. 8.2.i) de la Ley 2/2011) pueden resultar eficaces en este terreno como forma de animar esa concienciación.

24. Esta federación aúna a las personas con discapacidad física, visual, auditiva, con parálisis o lesión cerebral y con discapacidad física interna o fisiológica. Las modalidades deportivas que tienen cabida son el atletismo, baloncesto, boccia, ciclismo, esgrima, esquí, fútbol, goal-ball, halterofilia, hockey silla, natación, petanca, slalom, tenis mesa, tenis silla tiro con arco, vela e hípica. Cuenta también con programas específicos de iniciación al deporte adaptado y de tecnificación deportiva. Información obtenida de la página web <http://www.fesa.es>.

fedicv.org, tras el Informe favorable de la Dirección General de Deporte de 15 de julio de 1998 y visado posteriormente por el Consell Valencià de L'Esport el 24 de mayo de 2011, pese a ser evidente que ni siquiera estaban acomodados a la Ley 2/2011, promulgada tres meses antes). Y es que precisamente el grueso del Decreto 2/2018 (más de la mitad de su articulado) está dedicado a regular su funcionamiento, sujetándolas en particular a los cambios normativos habidos en materia de transparencia, buen gobierno y participación ciudadana (cristalizados en la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat), valores que son también exigibles a aquellas entidades de carácter privado que están bajo la tutela de la Generalitat Valenciana y a las que les corresponde el ejercicio delegado de funciones públicas de carácter administrativo (art. 61.2 de la Ley 2/2011 y art. 36.2 del Decreto 2/2018).

5.2. *Estatutos de FEDI-CV*

De estos Estatutos un tanto anticuados interesa destacar el propósito de los constituyentes de “asociarse para fomentar y desarrollar actividades físico-deportivas para personas con discapacidad psíquica en todas sus modalidades”, dándose la denominación de “Federación de Deportes para personas con discapacidad psíquica”, integrándose en la por entonces llamada Federación Española de Deportes para Minusválidos Psíquicos (FEDEMPS) (art. 3.1 de los Estatutos de FEDI-CV).

Del régimen jurídico que ofrecen estos Estatutos, interesa en particular la previsión de unos órganos técnicos (art. 42), en concreto un Director Técnico y unos Coordinadores Técnicos de los diferentes Bloques Deportivos, en los que descansa el diseño, dirección, control y ejecución de los distintos programas que conforman la política deportiva que promueve FEDI-CV. Así, al Director Técnico compete “coordinar la ejecución de los cometidos del personal del que están formados los Bloques Deportivos, buscando la unificación de métodos, sistemas y criterios” (art. 43.4), elaborar el “proyecto de reglamento de funcionamiento de los Bloques Deportivos” (art. 43.6), así como dirigirlos y controlarlos (art. 43.5). Es, en cambio, tarea del Coordinador de cada uno de los Bloques Deportivos que se prevean “coordinar la ejecución de los cometidos del personal del que están formadas las Comisiones de su Bloque, buscando la unificación de métodos, sistemas y criterios” (art. 45.4), pudiendo también dirigirlos y controlarlos por delegación del Director Técnico (art. 45.5).

El silencio estatutario respecto a las modalidades deportivas que en el plano competitivo impulsa FEDI-CV se suple a través de los calendarios que refleja su página web, ciertamente desactualizados por los efectos de la pandemia en la actividad deportiva. Así, para el segundo semestre de la temporada 2019 (que parece corresponderse con el decurso del año natural) se preveían campeonatos autonómicos de petanca, pádel, fútbol 8 y tenis de mesa. Asimismo, en la Sección “Deportes” aparece indicada la natación, si bien con la advertencia “en construcción”. También en el Programa Deportivo, que seguidamente se analizará, se apunta a la organización de competiciones autonómicas

adaptadas de atletismo, baloncesto y fútbol sala, así como exhibiciones de gimnasia rítmica.

5.3. Programa Deportivo de FEDI-CV

Quizá conscientes de la falta de acomodación de su normativa interna, la página web ofrece una Sección intitulada “Transparencia”, en la que se da acceso al denominado “Programa Deportivo FEDI-CV 2019”, cuyo propósito es recoger “la normativa y el funcionamiento de nuestra Federación a nivel deportivo”, sin perjuicio de las “normativas específicas de aquellas competiciones deportivas que la federación organice”. En este documento, es uso corriente en la denominación de la Federación el empleo del adjetivo “intelectual” en lugar de “psíquica”, señalándose como objetivo el “organizar y coordinar las actividades deportivas y competiciones dirigidas a personas con discapacidad intelectual que se desarrollen en el ámbito de la Comunidad Valenciana y que permitan la participación en las mismas de clubes adscritos a nuestra Federación y a sus deportistas”.

Se recuerda asimismo su adscripción a FEDDI ESPAÑA (Federación Española de Deportes para personas con discapacidad intelectual), que suponemos heredera de la FEDEMPS mencionada en los Estatutos de FEDI-CV. De ahí que se explicita también que “es objetivo de nuestra Federación potenciar y apoyar la participación de nuestro@s deportistas en todos aquellos Campeonatos Nacionales que refuercen nuestro deporte autonómico”, así como también “contribuir en la máxima proyección de los deportistas de élite adscritos a nuestra Federación, especialmente de aquellos que compiten a nivel internacional y su rendimiento deportivo trasciende fuera de nuestra comunidad y país”.

Con el propósito de atender “la diversidad y las diferencias personales motrices y competitivas” y de equilibrar “al máximo las oportunidades entre los géneros en la participación deportiva”, las “competiciones autonómicas se estructuran en distintas categorías en función de las competencias y habilidades de los deportistas, siendo las mismas paritarias en cuanto a género”. De esta manera, las categorías atienden exclusivamente al nivel técnico de los deportistas, sin la tradicional articulación de la competición en masculina y femenina.

El diferente nivel técnico de los competidores de una misma modalidad deportiva, sujeto a la valoración de “los responsables técnicos de cada club participante en las competiciones de FEDI-CV”, justifica la previsión de tres categorías “para garantizar la participación más equilibrada de todos los equipos”. El documento contiene su respectiva definición:

“1.-COMPETICIÓN

Es el nivel dirigido a aquellos deportistas que poseen un nivel de competencia deportiva lo suficientemente alto para poder practicar el deporte sin modificación del Reglamento correspondiente y por tanto los participantes deberán conocer y respetar el reglamento de la Federación Deportiva correspondiente.

2.-ADAPTADA

Es el nivel dirigido a aquellos deportistas que posean un nivel de competencia deportiva que necesiten en parte la adaptación del reglamento a sus necesidades y por tanto se realizarán las modificaciones necesarias a los reglamentos que serán especificadas en la convocatoria y normativa específica de cada competición.

3.-HABILIDADES DEPORTIVAS

Es el nivel dirigido a aquellos deportistas que posean un nivel de competencia motriz menor y que requieran de realizar Pruebas Deportivas (individuales) o competiciones deportivas MUY ADAPTADAS. Para ello, se realizarán las modificaciones necesarias a los reglamentos que serán especificadas en la convocatoria y normativa específica de cada competición”.

Reiterando lo ya señalado anteriormente, sin dejar de destacar los loables propósitos de FEDI-CV por dispensar a las personas con discapacidad intelectual programas y actividades de índole deportiva que contribuyan a su bienestar y realización personal, se echa de menos, sin embargo, que FEDI-CV se erija en un instrumento activo que permita procurar, cuando las circunstancias concurrentes en el deportista discapacitado lo hagan posible, una plena inclusión en la práctica, entrenamiento y competición deportiva federada ordinaria. De hecho, la propia definición que FEDI-CV hace de la categoría “Competición” nos muestra que puede haber un segmento de “deportistas que poseen un nivel de competencia deportiva lo suficientemente alto para poder practicar el deporte sin modificación del Reglamento correspondiente” y, en consecuencia, con unas destrezas o habilidades deportivas no especialmente distantes de las que puedan tener los practicantes menos talentosos en el marco de las competiciones federadas ordinarias.

Con todo, la previsión, reflejada en el Programa Deportivo, de una “Liga Fútbol 8 inclusiva”, con la participación obligatoria (numéricamente circunscrita a dos) de jugadores sin discapacidad intelectual con licencia por la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana, es una iniciativa experimental muy interesante, en la que, por añadidura, es de celebrar la colaboración entre Federaciones. No obstante, quizá no sea muy afortunado el cariz un tanto proteccionista, lindante con el asistencialismo competitivo, que dejan traslucir algunas de las líneas generales de la competición reflejadas en el Programa Deportivo, en particular en lo concerniente a las aptitudes deportivas que deben tener los denominados “jugadores inclusivos”, que no podrán oficiar de guardametas, ni tener en el juego un carácter excesivamente relevante, “ya que su misión es facilitar el juego del deportista con discapacidad y darle apoyo en lo que precise”. Son advertencias que están de más, pues cae de su peso que aquellos jugadores que se brindan a participar en competiciones de tal naturaleza no precisan de especiales admoniciones para apercibirse de qué se espera de ellos o cuál es el rol que han de adoptar en el curso de la competición.

En lo que hace a la Competición de Tenis de Mesa, sorprende que, en contra de lo señalado tan categóricamente en las bases generales del Programa

Deportivo, se prevea en el Programa Deportivo 2019 para cada una de las categorías (que no son tres, sino cuatro, una de ellas tendente a aislar injustificadamente a los Síndromes de Down del resto de personas con discapacidad intelectual, sin consideración a su nivel de destreza) la separación de deportistas masculinos y femeninos, sin que se dé razón alguna al respecto.

Finalmente, el Programa Deportivo, en coherencia con la integración de FEDI-CV en su homóloga nacional, dedica un apartado a las Selecciones Autonómicas, fijando los requerimientos de titulación y experiencia que habrá de tener el seleccionador, así como los estándares de compromiso (conocer sobradamente a todos los deportistas elegibles) para poder ser designado por la Junta Directiva. Sorprende, sin embargo, que tal tarea no recaiga en órganos técnicos como el Director Deportivo o los Coordinadores Técnicos de los distintos Bloques Deportivos contemplados en los Estatutos.

IV. RETOS DE FUTURO: CÓMO HACER PLENA LA EXPERIENCIA DEPORTIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad intelectual en el ámbito del deporte siguen siendo muchas. La práctica libre del deporte desde luego no les está vedada. Otra cosa podría decirse, en cambio, cuando su pretensión o la de sus familias es incorporarla a un programa de enseñanza y entrenamiento. No están los tiempos para que un gestor deportivo tome la imprudente (y, por qué no decirlo, deleznable) determinación de exteriorizar un contundente NO' a los deseos de aprender de una persona con discapacidad intelectual, máxime cuando la oferta formativa se halla, directa o indirectamente, bajo la supervisión o tutela de la administración pública²⁵ al dispensarse en instalaciones públicas o entidades privadas en régimen de convenio o concierto.

Sin embargo, el régimen jurídico del que hemos dado cuenta en este trabajo exige imperiosamente mayores avances. Ya no se trata de una mera “integración”, esto es, incorporación a una determinada oferta deportiva de formación o de competición, sino de hacer posible una auténtica “inclusión”, lo que exige estar en disposición de atender convenientemente la diversidad, no desde una posición meramente voluntarista, que muestra solidaridad y generosidad siempre digna de alabanza, sino ofreciendo profesionalidad y competencia para tratar de allanar al máximo esas barreras que las personas con discapacidad intelectual traen “de serie” y, al tiempo, prepararlos para hacer plena esa experiencia saludable de práctica del deporte con el culmen de la competición.

25. En el ámbito de la Comunitat Valenciana, la competencia en materia de fomento y promoción deportiva corresponde a la Generalitat (arts. 3.8 y 8.2.o) de la Ley 2/2011), a las diputaciones provinciales (art. 6.2 de la Ley 2/2011) y a los municipios (art. 7.2 de la Ley 2/2011), sin olvidar la colaboración de las federaciones y los clubes deportivos, especialmente en lo concerniente a la organización de competiciones (art. 7.8 de la Ley 2/2011). Véase sobre esta distribución de competencias A. VALIÑO ARCOS, “El ejercicio de la potestad disciplinaria deportiva en el ámbito de la administración local”, en *Revista Aranzadi de Derecho de Deporte y Entretenimiento*, núm. 67 (2020), pp. 72 y ss.

La realidad es la que es y la inclusión de las personas con discapacidad intelectual en la competición federada ordinaria es un sueño que dista muy mucho de hacerse realidad en un futuro próximo. Su inconciliable contraste con la apuesta por la excelencia y el rendimiento deportivo, ambos presentes en la legislación sectorial, entrañan un obstáculo casi insalvable. Sin embargo, está en la mano de los poderes públicos, a través de los recursos con los que cuenta, doblar esa resistencia de las entidades deportivas que tutela a posibilitar una auténtica inclusión de la realidad de la discapacidad intelectual en la competición federada ordinaria en aquellos casos en los que el desarrollo individual de la persona lo haga posible.

La apuesta experimental de FEDI-CV con la modalidad de Fútbol 8 es un comienzo, que no excluye que en las Federaciones deportivas ordinarias puedan emprenderse iniciativas semejantes. A tal fin, la colaboración con FEDI-CV o, subsidiariamente, con profesionales de la educación especial se antoja decisiva.

El paso siguiente ha de darse en relación con los deportes individuales, en los que la inclusión de las personas con discapacidad intelectual se presenta más complicada. Sin embargo, en deportes como el tenis, flexibilizar el rango de edad en la que podrían participar, o, todavía mejor, diseñar competiciones de inspiración más recreativa y formativa, con adaptación del entorno y las condiciones de juego para todos los participantes (canchas más pequeñas, raquetas más cortas, pelotas más voluminosas y lentas), son senderos que valdría la pena empezar a recorrer si se quiere trasladar de forma efectiva a la vida de las personas con discapacidad intelectual esas maximalistas declaraciones de intenciones que el ordenamiento jurídico constantemente le reserva y reconoce.

Naturalmente, esta forma de competición inclusiva, que sacrifica el alto nivel y la máxima excelencia por el valor de la plena y efectiva inclusión de las personas con discapacidad intelectual, no excluye que la valoración y premiación del rendimiento de las personas con discapacidad intelectual en su preciso contexto ambiental siga produciéndose. El movimiento "Special Olympics", presente en 170 países y que alcanza a casi cuatro millones de deportistas con discapacidad intelectual en la práctica de 32 modalidades deportivas es, sin duda, un buen botón de muestra, cuya plena implantación en todo el territorio español (sólo presente en 13 de sus Comunidades Autónomas)²⁶ es una urgencia inaplazable.

26. Información extraída de <http://w.specialolympics.es>.